

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

TEMA: NOTIFICACIONES A DEUDOR TRIBUTARIO
CON CONDICIÓN DE “NO HABIDO”

SUMILLA: La Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445 fueron remitidas al domicilio fiscal declarado por la propia empresa; por tanto, conforme a lo previsto en el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario, las notificaciones realizadas en el domicilio se consideran válidas siempre que el deudor no haya comunicado el cambio de este. De modo que, al haberse obtenido como resultado de tales notificaciones —y en tres oportunidades distintas— la “negativa de recepción por persona capaz”, correspondía aplicar los artículos 4 y 6 del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, que regulan, por un lado, el procedimiento para adquirir la condición de “no hallado” y, por otro, el procedimiento para adquirir la condición de “no habido”.

PALABRAS CLAVE: notificación de resoluciones administrativas, condición de “no habido”, domicilio fiscal

Lima, cuatro de abril de dos mil veintitrés

**LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**

VISTA

La causa en audiencia pública de la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

En el presente proceso sobre nulidad de resolución administrativa, la demandante **Distribuidora Harold Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)** interpuso recurso de casación el once de enero de dos mil

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

veintidós (foja doscientos noventa y seis del Expediente Judicial Electrónico - EJE¹), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete, del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno (foja doscientos setenta y ocho), expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número once, del treinta de abril de dos mil veintiuno (foja doscientos diecisiete), que declaró infundada la demanda.

Antecedentes

Demanda

Mediante escrito del diez de mayo de dos mil diecinueve (foja cuarenta y siete), Distribuidora Harold EIRL interpuso demanda contencioso administrativa contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en la cual precisó el siguiente petitorio:

Pretensión principal: Se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10739-2-2018 del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

Pretensión accesoria: Se declare la nulidad de la Resolución de Oficina Zonal Nº 1969140002939/SUNAT, del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, y se ordene que se notifiquen las Resoluciones de Ejecución Coactiva de números 19100600007480, 1910070010207 y 1910070011445.

Los argumentos principales que sustentan la demanda son los siguientes:

- a) Según el artículo 45 del Decreto Ley Nº 21621, Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, el titular puede asumir el cargo de gerente, en cuyo caso asumirá las facultades, deberes y responsabilidades de ambos cargos, debiendo emplear para todos sus actos la denominación de “titular-gerente”.

¹ Todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

- b)** La empresa ha tenido y tiene un solo titular gerente, quien a su vez ha sido y es su representante. En los recursos de reclamación y de apelación argumentó que este se encontraba privado de libertad desde el catorce de diciembre de dos mil doce hasta el dieciséis de mayo de dos mil catorce, lo que se probó con el certificado de libertad expedido por el Establecimiento Penal Miguel Castro Castro.
- c)** Las notificaciones de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480, y de las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445 no son válidas porque el titular gerente de la empresa no podía recibirlas ni tomar conocimiento de las mismas o ejercer acción alguna.
- d)** En sede administrativa se declaró a la empresa como “no habida”, ya que las resoluciones de ejecución coactiva no fueron recibidas en su domicilio; ello generó que las notificaciones se realicen mediante edictos. Sin embargo, la contribuyente no puede ser considerada como “no habida” porque nunca recibió las notificaciones indicadas; además, no fue su voluntad ser inubicable ni negligente (por no comunicar la variación de su domicilio), sino que se debió a un evento de fuerza mayor, un hecho imprevisible, como lo es la privación de la libertad de su representante — quien fue encarcelado por una prisión preventiva dictada por un Juzgado Penal—. Por tanto, la calificación de “no habida” es inválida y consecuentemente lo es la notificación de la Carta Nº 02243-2016-SUNAT/6N0920 publicada en la página web de la SUNAT.
- e)** Los requerimientos estaban referidos a documentos que la administración sabía que estaban incautados por el Juzgado Penal que dictó la prisión preventiva; no obstante, como la parte no respondió, la SUNAT determinó el tributo sobre una base “no real”, que ha sido validada por el Tribunal Fiscal.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

Contestación de demanda de la SUNAT

La SUNAT —representada por su Procuraduría Pública— contesta la demanda el trece de septiembre de dos mil diecinueve (foja ciento treinta y siete). En dicho escrito, se fundamenta lo siguiente:

- a) La demanda es improcedente porque no contiene la conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio, puesto que, a pesar de que se solicita la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10739-2-2018, no se identifica ni explica la causal en que se habría incurrido, conforme al artículo 10 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- b) El artículo 11 del Código Tributario establece la obligación de fijar y cambiar el domicilio fiscal, el cual se considera subsistente mientras que su cambio no sea comunicado formalmente.
- c) El artículo 104 del citado código y el Decreto Supremo Nº 041-2006-EF regulan las condiciones para que la administración declare a un contribuyente como “no hallado” y “no habido”. Así, en el Informe Nº 141-2017-SUNAT/7N0930 se señaló que la demandante adquirió la condición de “no hallado” porque fue notificada en tres oportunidades con la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445, obteniendo constancia negativa de recepción por persona capaz. Incluso, con fecha trece de diciembre de dos mil trece, la SUNAT publicó un requerimiento para que la empresa cumpliera con declarar o confirmar su domicilio fiscal hasta el último día del mes de diciembre de dos mil trece; sin embargo, al no hacerlo, el dos de enero de dos mil catorce, dicha entidad publicó la condición de “no habida”.
- d) En suma, la administración tributaria siguió el procedimiento previsto por el Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, declarando “no hallada” a la demandante y, posteriormente, “no habida”. Por ello, al dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la SUNAT se encontraba facultada para

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

notificar la Carta Nº 02243-2016-SUNAT, acorde al numeral 2 del inciso e) del artículo 104 del Código Tributario.

Contestación de demanda del Tribunal Fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Procuraduría Pública, en representación judicial del Tribunal Fiscal, contesta la demanda el dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja ciento cuarenta y cuatro). En dicho escrito, se fundamenta lo siguiente:

- a) Según el numeral 2 del inciso e) del artículo 104 del Código Tributario, cuando se tenga la condición de “no hallado” o “no habido”, o cuando el domicilio del representante de un no domiciliado fuera desconocido, la administración podrá realizar la notificación mediante la publicación en su página web o en el diario oficial, entre otros. Se trata de una modalidad de notificación utilizada cuando no pueda ser realizada en el domicilio fiscal del deudor tributario, por cualquier motivo imputable a este.
- b) De acuerdo a lo regulado en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, el deudor tributario adquiere la condición de “no hallado” sin que sea necesaria la emisión y notificación de algún acto administrativo; por el contrario, basta que al momento de la notificación (mediante correo certificado o mensajero) o al efectuarse la verificación del domicilio fiscal, se presente alguna de las siguientes situaciones: **i)** negativa de recepción de la notificación o negativa de recepción de la constancia de la verificación del domicilio fiscal por cualquier persona capaz ubicada en el domicilio fiscal; **ii)** ausencia de persona capaz en el domicilio fiscal o que este se encuentre cerrado; y **iii)** no existe la dirección declarada como domicilio fiscal. Aunado a ello, en el citado artículo se indica que para determinar la condición de “no hallado” deben producirse los supuestos antes señalados, en tres oportunidades (en días distintos), independientemente del orden en que se presenten.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

- c)** Según el numeral 4.6. del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF las situaciones antes señaladas deben anotarse en el acuse de recibo o en el acuse de la notificación a la que se refieren los incisos a) y f) del artículo 104 del Código Tributario, respectivamente, o en la constancia de la verificación del domicilio fiscal.
- d)** En el numeral 6.1. del artículo 6 del acotado decreto supremo, se establece que la SUNAT procederá a requerir al deudor tributario que adquirió la condición de “no hallado” para que cumpla con declarar o confirmar su domicilio fiscal hasta el último día hábil del mes en el que se le efectúa el requerimiento, bajo apercibimiento de asignarle la condición de “no habido”. De acuerdo con ello, en el Informe Nº 141-2017-SUNAT/7N0930 se señaló que la demandante adquirió la condición de “no hallado” y, luego, de “no habido”; por tanto, la administración acreditó la causal prevista en el Decreto Supremo Nº 041-2006-EF así como haber cumplido con el procedimiento establecido sobre el particular.
- e)** Considerando ello y que la empresa mantenía su condición de “no habido” hasta el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la SUNAT se encontraba facultada para notificar la Carta Nº 02243-2016-SUNAT/6N0920, conforme a lo previsto en el numeral 2 del inciso e) del artículo 104 del Código Tributario. Por tanto, los requerimientos posteriores y sus resultados se notificaron acorde a ley.
- f)** Por último, lo alegado por la demandante —al señalar que su representante se encontraba privado de libertad— no invalida las notificaciones efectuadas por la administración tributaria. De ahí que el procedimiento de fiscalización se desarrolló de acuerdo a ley, sin que se advierta que la SUNAT haya actuado de forma arbitraria o haya vulnerado el derecho al debido proceso o el derecho de defensa de la empresa, máxime si en el procedimiento contencioso tributario dicha parte interpuso recursos de reclamación y apelación.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del treinta de abril de dos mil veintiuno (foja doscientos diecisiete), el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró **infundada** la demanda. El Juzgado sustentó su decisión en los siguientes fundamentos:

- a) De acuerdo con los argumentos de la demanda, se cuestiona que, durante el procedimiento de fiscalización, los requerimientos, valores y cartas no debieron notificarse a la empresa mediante publicación en la página web de la SUNAT, en tanto no debió calificársele como “no hallada” y, posteriormente, como “no habido”. Por tal motivo, **el análisis de la controversia merece la revisión de las notificaciones** de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480, y de las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445.
- b) Conforme a los actuados administrativos, se advierte que los notificadores de la SUNAT acudieron al domicilio fiscal de la empresa para poner en conocimiento de dicha parte la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445; asimismo, encontraron personas en dicha dirección, pero se negaron a recibir las notificaciones, de lo cual se dejó constancia. Por tanto, considerando tal situación, así como también que el domicilio fiscal no fue modificado por la demandante, se verificó que esta debía ser calificada como “no hallada”, conforme a los numerales 4.1 y 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, y posteriormente como “no habida”.
- c) En virtud a la condición de la empresa, aplicando el numeral 2 del inciso e) del artículo 104 del Código Tributario, las notificaciones efectuadas mediante publicación en la página web de la SUNAT resultan válidas, esto es, de la Carta Nº 02243-2016-SUNAT/6N0920, el Resultado del Requerimiento Nº 1921110000013, el Requerimiento Nº 1922160000530 y

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

su resultado, y de las Resoluciones de Determinación Nº 1940030003908 y Nº 1940030003923 y la Resolución de Multa Nº 1940020013411.

- d) Por tanto, no es correcta la alegación de la demandante referida a que no podía responder dichas notificaciones (realizadas en el año dos mil dieciséis), ya que la pena de prisión privativa de libertad de su gerente general culminó el dieciséis de mayo de dos mil catorce, según lo señalado por el certificado de libertad (foja ciento quince del tomo V del expediente administrativo electrónico).
- e) Por último, si bien, cuando la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y las Resoluciones Coactivas N.º 1910070010207 y N.º 1910070011445 fueron notificadas a la demandante, su representante legal se encontraba privado de libertad, lo cierto es que, en ese momento, el domicilio fiscal no estaba vacío, sino que había personas que se negaron a recibir tales resoluciones. Además, no existe ningún documento que pruebe que la empresa haya modificado su domicilio y que su titular-gerente era su único trabajador; de modo que se trata de afirmaciones sin sustento alguno.

Sentencia de vista

Mediante sentencia de vista del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno (foja doscientos setenta y ocho), la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, **confirmó** la sentencia de primera instancia, que declaró infundada la demanda. El colegiado superior sustentó su decisión en los siguientes fundamentos:

- a) La condición de no hallado se adquiere automáticamente cuando, al notificarse mediante correo certificado o mensaje, existe negativa de recepción de dicha notificación; siempre que ello se produzca en tres oportunidades, en días distintos y que conste en los acuses de recibo correspondientes. Ello habilita que la SUNAT proceda a efectuar

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

notificaciones mediante publicación en su página web y que, luego de requerir a la parte la declaración o confirmación de su domicilio fiscal, al vencimiento del plazo, proceda a considerarla como “no habida”; no se necesita para ello la emisión de un acto administrativo adicional.

- b)** La Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445 fueron válidamente notificadas al domicilio fiscal de la demandante, en tres fechas distintas y dejándose constancia de “negativa de recepción por persona capaz” en el cargo de notificación. Por ello, a tenor del numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, el trece de diciembre de dos mil trece, la SUNAT publicó en su página web que la empresa adquirió la condición de “no hallado” y le solicitó mediante el Requerimiento Nº 19100000037 que declare su nuevo domicilio fiscal o confirme el actual, hasta el último día hábil del mes de diciembre del año dos mil trece.
- c)** Mediante publicación en la página web de la SUNAT, realizada el dos de enero de dos mil catorce, y con base en el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, se comunicó que la contribuyente no cumplió con declarar o confirmar su domicilio fiscal; por tanto, en dicha fecha adquirió la condición de “no habida”, condición que ostenta hasta la actualidad.
- d)** La Carta Nº 02243-2016-SUNAT/6N0920, mediante la cual se comunicó el reinicio del procedimiento de fiscalización y se solicitó a la empresa que cumpla con el Requerimiento Nº 1921110000013, fue notificada el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis a través de la página web de la SUNAT. Sin embargo, ante el incumplimiento, se emiten el resultado respectivo, así como el Requerimiento Nº 1922160000530 y su resultado, y posteriormente las Resoluciones de Determinación Nº 194-003-0003908 y Nº 194-003-0003923 y la Resolución de Multa Nº 194-002-0013411; ello, en atención al reparo a la base imponible del impuesto a la renta por la falta de sustento documentario de los gastos deducidos y a la multa

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

impuesta por la infracción tipificada en el inciso 1 del artículo 178 del Código Tributario.

- e) De acuerdo a la copia legalizada del certificado de libertad expedido por la directora del Establecimiento Penal Miguel Castro Castro, se aprecia que el representante de la empresa estuvo privado de su libertad desde el catorce de diciembre de dos mil diez hasta el dieciséis de mayo de dos mil catorce. De ahí que, considerando la condición de “no habida” de la demandante, se tiene que todas las notificaciones fueron realizadas conforme a ley.
- f) Por último, el hecho de que en la fecha de la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y de las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445 el representante legal de la empresa se encontraba privado de su libertad, no desvirtúa lo dispuesto en el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario, según el cual no resulta una exigencia que la notificación sea recibida necesariamente por el deudor tributario o su representante, sino por cualquier persona que se encontrase en el domicilio fiscal —declarado por la propia contribuyente y que, además, no ha sido modificado—.

Causales procedentes del recurso de casación

Mediante auto de calificación del veintitrés de mayo de dos mil veintidós (foja ciento doce del cuaderno de casación), esta Sala Suprema únicamente declaró la procedencia de tres de las cuatro infracciones normativas formuladas en el recurso de casación de la demandante Distribuidora Harold EIRL, esto es, omitió pronunciarse sobre la procedencia de una de las infracciones normativas denunciadas. Sin embargo, considerando que dicha situación —debido a su transcendencia— no acarrea la nulidad de la calificación efectuada en su oportunidad, conforme al artículo 172 del Código Procesal Civil, corresponde que, en aplicación de los principios de concentración, economía y celeridad procesal, previstos en el artículo V del título preliminar del citado código, todas

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

las causales casatorias del recurso de casación se consideren procedentes, de acuerdo al siguiente detalle²:

a) Infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y del artículo I del título preliminar del Código Procesal Civil

Señala que se vulneró el derecho a la observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional, así como el derecho a la prueba; toda vez que no se valoró la partida electrónica presentada como prueba, en la cual consta que el titular (y gerente) de la demandante, que hace de único órgano de administración, se encontraba privado de su libertad y que, por ende, le era materialmente imposible conocer las resoluciones emitidas por la SUNAT.

Añade que se ha inobservado el artículo 5 de la Ley Nº 21621, según el cual “cada persona natural podrá ser titular de una o más empresas individuales de Responsabilidad Limitada”; esto explica que la demandante solo tenía como titular, representante y único órgano de administración, a una persona que se encontraba privada de su libertad desde el veintiséis de noviembre de dos mil diez (por una medida limitativa de derecho). De ahí que también se habría vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

b) Infracción normativa del artículo 102 del Código Penal

Refiere que se omitió considerar que, al amparo de la Ley Nº 27379, el Primer Juzgado Supraprovincial ordenó la medida limitativa de derechos, detención, allanamiento, descerraje e incautación de bienes correspondientes a Carlos Francisco Vásquez Jurado y otros —así como la incautación de los documentos de la demandante—, decisión que fue confirmada por el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial, con la que se abrió instrucción con detención por los cargos de

² Se precisa que, en el resumen de los argumentos de cada infracción normativa, se ha tomado como referencia el auto de calificación y el mismo recurso de casación.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

colaboración con el terrorismo y se declaró procedente la incautación de los bienes del señor Vásquez Jurado.

Agrega que la Sala Superior debió valorar la resolución número cuatro, del quince de diciembre de dos mil diez, emitida por el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial, ya que esta se amparó en el artículo 102 del Código Penal.

Adicionalmente, menciona que el representante de la demandante fue absuelto el trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante una sentencia que se encuentra pendiente de ser resuelta por la Sala Suprema Penal Transitoria (recurso de nulidad); motivo por el cual, a la fecha, está pendiente la devolución de los documentos contables solicitados por los codemandados.

c) Infracción normativa del artículo 171 del Código de Procedimientos Penales

Sostiene que en la sentencia de vista no se tuvo en cuenta que según el artículo 171 del Código de Procedimientos Penales, “los instrumentos, armas y efectos que se recojan se sellarán, si fuera posible, acordando su retención y conservación. [...]”; esto es, los documentos solicitados por los demandados se encuentran incautados por mandato judicial, por tratarse supuestamente de instrumentos y efectos del delito cometido por Carlos Francisco Vásquez Jurado, representante de la demandante.

d) Infracción normativa del artículo 316 del Nuevo Código Procesal Penal

Indica que la sentencia de vista no consideró lo señalado en el acotado artículo 316, que establece que: “1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos, con que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la Investigación Preparatoria [...]”.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

Alega que los bienes incautados a Carlos Francisco Vásquez Jurado, representante de la demandante, son bienes que han pasado a jurisdicción del Estado hasta la conclusión del proceso penal.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. El recurso de casación

1.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. Por tanto, no basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido.

1.2. La labor casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, labor en la que los jueces realizan el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional”³, y revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica. En ese sentido, corresponde a los jueces de casación verificar y cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos.

1.3. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer

³ HITTERS, Juan Carlos (2002). *Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación*. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

1.4. Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso⁴, debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo.

1.5. En consideración a los hechos determinados por las instancias de mérito y las causales casatorias declaradas procedentes, concierne a esta Sala Suprema determinar si la Sala Superior infringió las normas denunciadas, al confirmar la sentencia de primera instancia. Por tanto, en primer término, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa de carácter procesal (error *in procedendo*), toda vez que, de ser estimada carecería de objeto pronunciarse sobre las demás infracciones. Solo en caso se desestime la causal casatoria de carácter procesal, se analizarán las de carácter material (error *in iudicando*).

⁴ MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). *Principios de derecho procesal civil*. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

SEGUNDO. Marco referencial de los hechos generados en sede administrativa, fijados por las instancias de mérito

En línea con la actuación jurisdiccional fijada por esta Sala Suprema, tenemos que las instancias de mérito han establecido como premisas fácticas probadas, derivadas de las actuaciones que se desprenden del expediente administrativo y que tienen relación con la materia controvertida, las siguientes:

2.1. El **cinco de enero de dos mil once**, cursando la Carta Nº 110191052560-01 y el Requerimiento Nº 1921110000013 (foja sesenta y ocho del tomo I del expediente administrativo electrónico), la SUNAT comunicó a la empresa (ahora demandante) el **inicio de un procedimiento de fiscalización** de los periodos enero a diciembre de dos mil ocho, correspondiente al impuesto a la renta de tercera categoría; asimismo, a través de dicha comunicación, solicitó la exhibición de documentación referida al mencionado tributo.

2.2. No obstante, el veinticinco de enero de dos mil once, la contribuyente presentó la Carta Nº 011-DHEIRL-2011, mediante la cual informó que no contaba con sus libros, registros y documentos contables porque estos se encontraban en poder del Tercer Juzgado Penal Supraprovincial. Ante ello, la administración tributaria emitió la Carta Nº 120-2011-SUNAT/2R1000 y el Comunicado Nº 190-000-0000012-01, a través del cual comunicó a la empresa la **suspensión de la fiscalización desde el dos de febrero de dos mil once** (foja ciento diecisiete del tomo I del expediente administrativo electrónico).

2.3. Posteriormente, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la administración emitió la Carta Nº 02243-2016-SUNAT/6N0920 (foja ciento quince del tomo I del expediente administrativo), mediante la cual comunicó a la empresa el **reinicio del procedimiento de fiscalización** e indicó que la documentación solicitada en su oportunidad mediante el Requerimiento Nº 1921110000013 debía exhibirse y/o presentarse el veintidós de diciembre de

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

dos mil dieciséis en su sede de Huánuco - Tingo María (Urb. Llicua Baja, Amarilis). Esta carta y la de número 110191052560-02, así como el Resultado del Requerimiento Nº 1922160000494 fueron notificados por la página web de la SUNAT, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Oficina Zonal Nº 1940240001197 (foja ciento doce del tomo I del expediente administrativo electrónico).

2.4. De otro lado, habiendo transcurrido el plazo de un año sin que la empresa cumpla con entregar la totalidad de la información y/o documentación solicitada en el requerimiento primigenio, la SUNAT emitió el **Resultado del Requerimiento Nº 1921110000013**, del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis (foja cincuenta y nueve del tomo I del expediente administrativo electrónico). En este documento, que también fue notificado por medio de la página web de la SUNAT, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Oficina Zonal Nº 1940240001198 (foja cincuenta y ocho del tomo I del expediente administrativo electrónico), **se solicitó a la contribuyente que informe su nuevo domicilio fiscal** y se adjuntó el Requerimiento Nº 1922160000530, mediante el cual se volvió a requerir a la parte la subsanación y pago de multas por infracciones tributarias cometidas, y documentación referida al tributo mismo.

2.5. Como la empresa no cumplió con ello, la SUNAT emitió el **Resultado del Requerimiento Nº 1922160000530**, que fue notificado también mediante la página web de la SUNAT, en que dispuso que la empresa se apersona a sus oficinas para recabar los documentos e informar su domicilio fiscal.

2.6. El procedimiento de fiscalización finalizó con las **Resoluciones de Determinación Nº 1940030003908** y **Nº 1940030003923** (fojas ciento veinticuatro y ciento veinticinco del tomo II del expediente administrativo electrónico), y la **Resolución de Multa Nº 1940020013411** (foja ciento treinta y tres del tomo II del expediente administrativo electrónico), valores que fueron

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

publicados en la página web de la SUNAT el siete de febrero de dos mil diecisiete, conforme al numeral 2 del inciso e) del artículo 104 del Código Tributario.

2.7. Seguidamente, el siete de marzo de dos mil diecisiete, la empresa interpuso **recurso de reclamación** contra las resoluciones acotadas (foja ciento cuarenta y tres del tomo II del expediente administrativo electrónico), el cual fue declarado **infundado** mediante la **Resolución de Oficina Zonal de Huánuco Nº 1960140002939/SUNAT**, del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (foja setenta del tomo II del expediente administrativo electrónico).

2.8. Ante ello, la contribuyente interpuso **recurso de apelación**, con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete (foja cinco del tomo II del expediente administrativo electrónico), el mismo que fue resuelto mediante **Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10739-2-2018**, del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, que **confirmó** la apelada (foja diez del tomo V del expediente administrativo electrónico).

TERCERO. Análisis de las causales de casación de naturaleza procesal

3.1. En este caso, la empresa demandante denuncia la infracción del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y del artículo I del título preliminar del Código Procesal Civil. Argumenta que la Sala Superior — inobservando el artículo 5 de la Ley Nº 21621— no valoró la partida electrónica presentada como prueba, en la cual consta que su gerente se encontraba privado de su libertad —desde el veintiséis de noviembre de dos mil diez, por una medida limitativa de derecho— y que ello le imposibilitó conocer las resoluciones emitidas por la SUNAT, al tratarse de la única persona que actuaba como titular y como único órgano de administración de la empresa; motivo por el cual, se habría vulnerado su derecho a la prueba y, por ende, al debido proceso

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

y a la tutela jurisdiccional, así como su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

3.2. De ahí que se procederá a analizar si los cuestionamientos antes referidos tienen asidero alguno, para lo cual resulta oportuno desarrollar los aspectos normativos del caso.

CUARTO. Sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y los derechos al debido proceso y tutela jurisdiccional

4.1. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales está regulado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, conforme al siguiente texto:

Constitución Política del Perú de 1993

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[...]

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

[...]

Por su parte, los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional están regulados en el inciso 3 de la acotada norma constitucional:

Constitución Política del Perú de 1993

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[...]

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

Ambos derechos se relacionan entre sí, porque el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional reconoce a la exigencia de la motivación suficiente como una garantía, por la cual toda persona tiene derecho a obtener una resolución fundada en derecho mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

elementos fácticos y jurídicos que los determinaron. Así las cosas, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no nace de una arbitrariedad de los magistrados, caso en el cual sería posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional.

4.2. En esa misma línea, es importante señalar que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos la motivación es:

[...] la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática [...]. En este sentido, la argumentación de un fallo [...] debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso.⁵ [Énfasis nuestro]

4.3. La garantía de la motivación de las resoluciones judiciales también está regulada en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé lo siguiente:

Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.

De la misma forma, el Código Procesal Civil establece, en los incisos 3 y 4 de su artículo 122, que las resoluciones contienen:

[...]

⁵ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Caso Chocrón Chocrón versus Venezuela”. Sentencia del uno de julio de dos mil once; fundamento 118.
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_227_esp.pdf

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico **correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según** el mérito de lo actuado;

4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente;
[...]. [Énfasis nuestro]

4.4. El proceso regular en su expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos:

- a) Falta de motivación propiamente dicha: cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o jurídico.
- b) Motivación aparente: cuando el razonamiento en la sentencia sea inconsistente y se sustente en conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso.
- c) Motivación insuficiente: cuando se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir, cuando el sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador, no se respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales este debe partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la judicatura.
- d) Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se violan las leyes del hacer/pensar, tales como de la no contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones con las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otras, que suponen la omisión de los principios elementales de la lógica y la experiencia común.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

En tal sentido, es pertinente anotar que esta Sala Suprema entiende que **la idea de motivación no alude a una justificación profusa, abundante o retórica, sino a la exigencia de un mínimo de motivación congruente**, en cuya *ratio decidendi* puedan observarse las razones por las que la Sala Superior llegó a la decisión correspondiente. Ello se condice con la postura del Tribunal Constitucional, expresada por ejemplo en el fundamento 5 (literal e) de la sentencia recaída en el Expediente N.º 04295-2007-P HC/TC:

5. Sin embargo no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente una violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en los siguientes supuestos: [...]

*e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, **sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel** en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control en sede constitucional. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).*

4.5. Así las cosas, la protección del derecho al debido proceso implica la observancia del principio de congruencia, por el cual, el juez al momento de resolver debe atenerse a los hechos de la demanda y de la contestación que hayan sido alegados y probados. De modo que, **de producirse una transgresión de este principio procesal el efecto será la nulidad de la resolución judicial**, conforme disponen el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil, los incisos 3 y 4 del artículo 122 y el inciso 6 del artículo 50 del mismo código. En esa misma línea, se ha pronunciado la Corte Suprema, respecto a la observancia del principio de congruencia procesal⁶. Por tanto, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, implica que los jueces están obligados a expresar las razones o justificaciones objetivas que sustentan sus

⁶ Se puede citar, por ejemplo, la Sentencia de Casación Nº 3950-2014 Lima, publicada en el diario oficial *El Peruano*, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, y la Sentencia de Casación Nº 1763-2014 Del Santa, publicada en el diario oficial *El Peruano*, el dos de mayo de dos mil dieciséis.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

decisiones, en relación con los **hechos demandados y controvertidos**. Es decir, solo se podrá decir que existe motivación suficiente por parte del órgano jurisdiccional y que, por ende, se han respetado los derechos a la motivación de las resoluciones y al debido proceso, cuando se emita pronunciamiento respecto del íntegro de las cuestiones debatidas en el procedimiento administrativo y el proceso judicial.

4.6. Es pertinente anotar que la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no solo incidirá en los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, sino también en el derecho de defensa y pluralidad de instancia. Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el fundamento jurídico 12 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 05871-2005-PA/TC, de la siguiente manera:

12. [...]

En la Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 2659-2003-AA/TC, este Tribunal tuvo oportunidad de precisar que el derecho de defensa:

*[...] se proyecta [...] como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la **situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés** [...].*

13. La observancia y respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera sea su materia. [Énfasis nuestro]

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado en los fundamentos jurídicos 9 y 16 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 2605-2014-PA/TC, lo siguiente:

[...]

9. Este Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de congruencia es uno que rige la actividad procesal, y obliga al órgano jurisdiccional a pronunciarse sobre las pretensiones postuladas por los justiciables (STC Exp. 1300—2002-HC/TC, Fundamento 27). **Dicho principio garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes** (STC Exp. 7022-2006-PA/TC, Fundamento 9).

[...]

16. Este Tribunal Constitucional ha señalado también que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales garantiza que las resoluciones judiciales no se deriven del mero capricho de los jueces, sino del ordenamiento jurídico y de la información veraz que alcancen las partes (STC Exp. 02786-2013-PA/TC, Fundamento 8; STC Exp. 08259-2013-PA/TC; Fundamento 6) [Énfasis nuestro]

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

De esta forma, no debe perderse de vista la protección constitucional que nuestro Estado le otorga al derecho de defensa, al regularlo en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; y que incluso ello ha sido ratificado en la **Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su numeral 1 del artículo 8**, establece que: “[...] toda persona tiene derecho a ser oída, [...] para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

4.7. Ahora bien, respecto del derecho al debido proceso se debe considerar que en doctrina se concibe una **subdivisión y diferenciación entre el debido proceso sustancial y el debido proceso procesal**. De este modo, el primero exige que todos los actos de poder, como normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales inclusive, sean justos, es decir, razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Por otro lado, el debido proceso procesal está conformado por el conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho, incluido el Estado⁷.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho en distintas oportunidades; por citar, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 2521-2005-PHC/TC, del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, ha dicho:

[...]

*5. En lo que respecta al derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, cabe señalar que dicho atributo fundamental forma parte del “modelo constitucional del proceso”, cuyas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse debido. En ese sentido, la exigencia de **su efectivo respeto no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial sino también con la propia validez de la configuración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir [...]***

⁷ BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo (2001). *Derechos fundamentales y proceso justo*. Lima, ARA Editores; p. 205

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

De la regulación contenida en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución y de la interpretación del Tribunal Constitucional, se desprende que la norma constitucional estaría referida solo al debido proceso procesal. En la sentencia recaída en el Expediente N.º 2940-2002-HC/TC, el máximo intérprete de la Constitución señaló:

[...]

2. [...] *El debido proceso, reconocido en el artículo 139º inciso 3), de la Constitución vigente, es una **garantía procesal compuesta de un conjunto de principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado.***

3. *El derecho al debido proceso dota, a quien es parte del mismo, de una serie de **garantías esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión.** Estos derechos esenciales, sin ser taxativos, son los siguiente: de **defensa, publicidad del proceso, a ser asistido y defendido por abogado, derecho a impugnar, derecho a la prueba, derecho a una justicia sin dilaciones indebidas y derecho a un juez imparcial.***

[...].

4.8. El derecho al debido proceso en otro ámbito distinto al judicial abarca el principio del debido procedimiento administrativo, regulado expresamente en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por el cual se les concede a los administrados derechos y garantías implícitos a un procedimiento regular y justo. En palabras de Morón Urbina⁸, “el principio del debido procedimiento constituye una **garantía general de los ciudadanos que ha sido introducida al Derecho administrativo** primero por la jurisprudencia, derivándola del derecho natural y de los tratados internacionales de derechos humanos”.

De ahí que el debido procedimiento se asemeja al debido proceso, porque comprende al conjunto de garantías que se ofrecen al administrado frente a la administración pública dentro de un procedimiento administrativo. Estas garantías, han sido estudiadas por el jurista Brewer-Carías⁹, que luego de un análisis comparativo de diversas legislaciones latinoamericanas, enumera como las siguientes principales garantías del debido procedimiento: **i)** el principio del

⁸ MORÓN URBINA, Juan (2001). *Comentarios a la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General*. Lima, Gaceta Jurídica; p. 29.

⁹ BREWER-CARÍAS, Allan Randolph (2003). *Principios del procedimiento administrativo en América Latina*. Bogotá, Legis; p. 262.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

contradictorio, **ii)** el derecho a la defensa, **iii)** el principio de la gratuidad, **iv)** el principio de la motivación de los actos administrativos, **v)** el principio de la confianza legítima, y **vi)** el tema de la garantía de la tutela judicial efectiva y su relación con el principio del agotamiento de la vía administrativa.

En suma, se colige que el debido proceso implica el respeto —dentro de todo proceso judicial— de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia.

QUINTO. Sobre el derecho a la prueba

5.1. En la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 03997-2013-PHC/TC (fundamento jurídico 3), se reconoce que: **“El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva**, pues, como ya lo ha señalado este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente N.º 010-2002-AI, **constituye un elemento implícito de tal derecho. [...]**” [Énfasis agregado]. Es así que los medios probatorios permitirán al juzgador sentenciar de forma adecuada, por lo cual es innegable la vinculación entre el derecho a la prueba y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

5.2. En esa misma línea, y remitiéndonos a la sentencia constitucional anotada, el Tribunal remarcó lo siguiente:

*6. Por tanto, existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. **Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa.** Según este derecho, **las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.** Así, por ejemplo, el artículo 188° del Código Procesal Civil establece que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. [Énfasis nuestros]*

5.3. De otro lado, en el fundamento jurídico 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 6712-2005-HC/TC (caso Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana), respecto al contenido del derecho a la prueba, y haciéndose

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

alusión a tratarse de un derecho de estructura compleja, se desarrolló que está compuesto por: “[...] el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia”. Expresamente se indicó en dicho pronunciamiento que la valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado.

5.4. La trascendencia del derecho a la prueba, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional y diversa doctrina especializada, conlleva la exigencia de que el órgano jurisdiccional valore de forma racional las pruebas ofrecidas y actuadas, y que dicha valoración se desprenda del texto íntegro de la decisión judicial.

SEXTO. Sobre la valoración de la partida electrónica emitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)

6.1. De acuerdo a los argumentos que sustentan el recurso, se desprende que la infracción normativa objeto de análisis se habría configurado por la supuesta falta de valoración de la partida electrónica adjuntada como anexo 4 de la demanda, esto es, la Partida Nº 11019734 emitida por la SUNARP (foja veintiocho); puesto que, a consideración de la recurrente, si la Sala Superior hubiera valorado dicha prueba, habría determinado que la empresa carecía de personal y que tenía como único personal a su titular gerente —el señor Carlos Francisco Vásquez Jurado, identificado con DNI 22476880¹⁰—, quien se encontraba privado de su libertad desde el dos mil diez (por una medida limitativa de derecho), por lo cual le era imposible conocer las resoluciones emitidas por la SUNAT.

¹⁰ La información indicada se extrae de la propia partida electrónica.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

6.2. Al respecto, de la revisión del expediente, se advierte que en el recurso de apelación (foja doscientos treinta y nueve) únicamente se adjuntó como medio probatorio —adicionalmente al presentado como anexo de su demanda— la carta notarial, de fecha quince de marzo de dos mil once, remitida por la Corporación Lindley Sociedad Anónima a Distribuidora Harold EIRL. Por tanto, en primer término, debe quedar claro que la Partida Electrónica Nº 11019734 no fue adjuntada en el acotado recurso impugnatorio y que, por ende, la Sala Superior no tenía la obligación de valorarla al emitir su pronunciamiento.

6.3. Adicionalmente, es importante resaltar que, si bien, la mencionada **partida** fue propuesta en la demanda como un medio probatorio que —a consideración de la empresa demandante— coadyuvaría a la resolución de la materia controvertida, **su ofrecimiento fue declarado improcedente**, mediante auto de saneamiento procesal (resolución número cinco, foja ciento setenta y cuatro). Ello, porque, según el Juez, se trataba de un medio probatorio referido a la admisibilidad de la demanda, mas no de uno vinculado con los hechos sustentatorios de la pretensión; dicho de otro modo, a criterio del juzgador era un medio probatorio impertinente, conforme a lo previsto en el artículo 190 del Código Procesal Civil¹¹. Por lo demás, dicha declaración de improcedencia fue

¹¹ **Código Procesal Civil**

Artículo 190.- Los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados improcedentes por el Juez.

Son también improcedentes los medios de prueba que tiendan a establecer:

- 1. Hechos no controvertidos, imposibles, o que sean notorios o de pública evidencia;*
- 2. Hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la contestación de la demanda, de la reconvencción o en la audiencia de fijación de puntos controvertidos.*

Sin embargo, el Juez puede ordenar la actuación de medios probatorios cuando se trate de derechos indisponibles o presuma dolo o fraude procesales;

- 3. Los hechos que la ley presume sin admitir prueba en contrario; y*
- 4. El derecho nacional, que debe ser aplicado de oficio por los Jueces. En el caso del derecho extranjero, la parte que lo invoque debe realizar actos destinados a acreditar la existencia de la norma extranjera y su sentido.*

La declaración de improcedencia la hará el Juez en la audiencia de fijación de puntos controvertidos.

[...]

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

consentida por la demandante, motivo por el cual el Juzgado tampoco tenía la obligación de valorarla al emitir su pronunciamiento.

6.4. Además, debe considerarse que, según el artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS: “En el proceso contencioso administrativo, la **actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso.** [...]” [Énfasis agregado]. Si bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la precitada ley, existe la posibilidad de que, excepcionalmente, se admitan medios probatorios extemporáneos, estos deberán referirse a hechos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso, y deberán estar directamente vinculados con las pretensiones postuladas. Empero, en el trámite del proceso judicial no se ha invocado ninguno de los dispositivos normativos anotados.

6.5. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que con la denuncia de la infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y del artículo I del título preliminar del Código Procesal Civil¹², la recurrente cuestiona que las instancias de mérito no hayan valorado la partida electrónica Nº 11019734 emitida por la SUNARP, toda vez que con ello acreditaría que solo una persona podía recibir las notificaciones dirigidas a la empresa: su titular-gerente, quien se encontraba privado de su libertad. De ahí que, en realidad, dicha parte considera que **no debió adquirir la condición de “no hallado”** y, luego, **de “no habido”** porque le era imposible recibir la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445; y que, por ende, al no corresponderle

¹² **Código Procesal Civil**

Artículo I.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

haber adquirido esta última condición, las cartas, requerimientos y valores emitidos con posterioridad a ello no debían ser notificadas mediante la página web de la SUNAT.

Sobre el particular, tanto el Juzgado como la Sala Superior han fundamentado su decisión explicando las razones de hecho y derecho por las cuales consideraron que la empresa demandante adquirió la condición de “no habida” después de seguirse con el procedimiento correspondiente. Veamos:

- a) El Juzgado, en el numeral II.4.2. de la parte considerativa de su sentencia, hace referencia al Informe Nº 141-2017-SUNAT/7N930, con base en el cual verifica que la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445 fueron notificadas al domicilio fiscal de la demandante en fechas distintas, y en todas las oportunidades el resultado obtenido fue la “negativa de recepción por persona capaz”. Asimismo, en dicho apartado indicó lo siguiente:

*[...] señala el informe de la SUNAT que **con fecha 13 de diciembre de 2013 se publicó en la página web de la SUNAT**, de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6° del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, la **lista de contribuyentes que adquirieron la condición de no hallado incluyendo a la demandante**, requiriéndoles que cumplan con levantar tal condición declarando su nuevo domicilio fiscal o confirmando el actual hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2013 y que **el día 02 de enero de 2014 se publicó la relación de contribuyentes que adquirieron la condición de no habido**, según el numeral 8.1 del artículo 8° de Decreto Supremo Nº 041-2006-EF. [...] [Énfasis agregado]*

- b) Aunado a ello, en el numeral II.4.4. de la parte considerativa de la acotada sentencia, el Juzgado señaló que: “[...] **los notificadores acudieron al domicilio fiscal informado por la demandante en su comprobante de información registrada, el cual no fue modificado** por ésta, y, encontró personas en el local de la demandante quienes se **negaron a recibir las mencionadas resoluciones**, [...]” [Énfasis agregado]. De modo que, al determinar que se produjeron los supuestos regulados en los numerales

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

4.1. y 4.2. del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF¹³, para que la demandante sea considerada como “no hallada” y luego como “no habida” (desde el dos de enero de dos mil catorce), correspondía aplicar el numeral 2 del inciso e) del artículo 104 del Código Tributario, que a la letra dice:

Artículo 104.- FORMAS DE NOTIFICACIÓN

*La Notificación de los actos administrativos se realizará, **indistintamente**, por cualquiera de las siguientes formas:*

[...]

*e) Cuando se tenga la condición de **no hallado o no habido** o cuando el domicilio del representante de un no domiciliado fuera desconocido, **la SUNAT podrá realizar la notificación por cualquiera de las formas siguientes:***

[...]

2) Mediante la publicación en la página web de la SUNAT o, en el Diario Oficial o, en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad.

La publicación a que se refiere el presente numeral, en lo pertinente, deberá contener el nombre, denominación o razón social de la persona notificada, el número de RUC o número

¹³ Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, denominado “Dictan normas sobre las condiciones de no hallado y de no habido para efectos tributarios respecto de la SUNAT”.

Si bien, en la última parte de la sentencia de primera instancia solo se hizo referencia a los numerales 4.1. y 4.2. del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, también formó parte de la fundamentación del Juez, el contenido de los numerales 4.3, 4.4. y 4.6. del citado artículo, lo que puede verificarse en el **numeral II.3.2.de la parte considerativa de la sentencia**. Hizo lo propio la Sala Superior, al referirse también a los numerales 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. y 4.6. del precitado artículo 4, en los **considerandos sexto y séptimo** de su sentencia. Para mayor ilustración, es pertinente citar la acotada norma.

Artículo 4.- PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE NO HALLADO

*4.1 El deudor tributario **adquirirá automáticamente la condición de no hallado**, sin que para ello sea necesaria la emisión y notificación de acto administrativo adicional alguno, **si al momento de notificar los Documentos mediante** correo certificado o **mensajero**, o al efectuar la verificación del domicilio fiscal, se presenta alguna de las siguientes situaciones:*

*1. **Negativa de recepción de la notificación** o negativa de recepción de la constancia de la verificación del domicilio fiscal **por cualquier persona capaz ubicada en el domicilio fiscal**.*

2. Ausencia de persona capaz en el domicilio fiscal o éste se encuentre cerrado.

3. No existe la dirección declarada como domicilio fiscal.

*4.2 Para determinar la condición de no hallado las situaciones señaladas en los incisos 1. y 2. del numeral 4.1 **deben producirse en tres (3) oportunidades en días distintos**.*

*4.3 **Para el cómputo de las tres (3) oportunidades** se considerarán **todas las situaciones que se produzcan, aún cuando pertenezcan a un solo numeral o a ambos, independientemente del orden en que se presenten**.*

4.4 Dicho cómputo se efectuará a partir de la última notificación realizada con acuse de recibo o de la última verificación del domicilio fiscal.

[...]

4.6 Las situaciones señaladas en el presente artículo, deberán ser anotadas en el acuse de recibo o en el acuse de la notificación a que se refieren los incisos a) y f) del Artículo 10 del Código Tributario, respectivamente, o en la constancia de la verificación del domicilio fiscal; y que para tal efecto emita el Notificador o Mensajero, de acuerdo a lo que señale la SUNAT.

[Énfasis nuestro]

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

del documento de identidad que corresponda, la numeración del documento en el que consta el acto administrativo, así como la mención a su naturaleza, el tipo de tributo o multa, el monto de éstos y el período o el hecho gravado; así como las menciones a otros actos a que se refiere la notificación.

[...]

[Énfasis agregado]

- c) Por ello, en el numeral II.4.5. de la parte considerativa de la referida sentencia, el Juzgado concluyó lo siguiente:

*[...] las notificaciones que se realizaron como **publicación en la página web de la Administración Tributaria de la Carta Nº 02243-2016-SUNAT/6N0920, el Resultado del Requerimiento Nº 1921110000013, el Requerimiento Nº 1922160000530 y su resultado, así como las Resoluciones de Determinación Nºs 1940030003908 y 1940030003923 y la Resolución de Multa Nº 1940020013411, fueron notificadas conforme a Ley***, por lo que no resulta correcto lo alegado por la parte demandante cuando indica que no podía responder los requerimientos anteriormente señalados, puesto que éstos fueron notificados en el año 2016 cuando su gerente general no se encontraba con prisión privativa de su libertad, pues su pena culminó el 16 de mayo de 2014, según lo señalado por el Certificado de libertad de folios 115 del tomo 5 del expediente administrativo. [...]

Añadió que las notificaciones de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y de las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445 se realizaron cuando el domicilio fiscal de la empresa demandante no se encontraba vacío, sino que las personas que lo habitaban se negaron a recibir tales notificaciones; así como que “[...] la demandante solo menciona que su **gerente titular era el único trabajador de la empresa**, sin embargo, **no obra en el expediente documentación que confirme tal información [...]**” [Énfasis agregado].

- d) Por su parte, en el numeral iii) del considerando décimo primero de la sentencia de vista, advirtió lo siguiente:

*[...] iii) según las constancias de notificación obrantes a folios treinta, treintidós y treinticuatro del tomo cinco, se advierte que las Resoluciones Coactivas números 1910070010207 y 1910070011445, y la Resolución de Ejecución Coactiva número 191-006-0007480 fueron válidamente **notificadas en el domicilio fiscal de la contribuyente Distribuidora Harold E.I.R.L., ubicado en Jirón Aguilar No. 907 – Huánuco**, mediante **certificación de la negativa a la recepción por persona capaz**, los días veintinueve de noviembre del dos mil doce, veintisiete de noviembre del dos mil trece y veintitrés de octubre del dos mil trece, respectivamente, procediendo los encargados de las diligencias de notificación, en todos los casos, a consignar sus datos de identificación y su firma, así como a especificar en la casilla “detalle de la negativa a la recepción” de los acuses de recibo el siguiente supuesto: “La persona capaz encontrada en el domicilio fiscal, rechazó la recepción del documento”; [...]* [Énfasis nuestro]

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

e) Por tal motivo, conforme a lo expuesto en el considerando décimo tercero, la Sala Superior concluyó que las mencionadas resoluciones coactivas fueron válidamente notificadas: “[...] máxime si se tiene en cuenta que según lo preceptuado en **el artículo 104, inciso a), del Código Tributario, no se exige que la notificación deba ser recibida necesariamente por el representante de la empresa; [...]**” [Énfasis agregado].

f) Adicionalmente, en el considerando décimo segundo, con base en los argumentos de hecho y derecho expuestos, y valorando los documentos obrantes en el expediente administrativo, se mencionó que:

*[...]que **la modalidad de notificación empleada por la Administración Tributaria respecto de la ahora demandante, Distribuidora Harold E.I.R.L., se encuentra ceñida a lo previsto en la normatividad pertinente glosada con antelación**, toda vez que al haberse notificado las Resoluciones Coactivas números 1910070010207 y 1910070011445, y la Resolución de Ejecución Coactiva número 191-006-0007480 mediante certificación de la negativa a la recepción en tres oportunidades y en días distintos (veintinueve de noviembre del dos mil doce, veintitrés de octubre y veintisiete de noviembre del dos mil trece) en el domicilio fiscal de la citada contribuyente, ésta **adquirió a partir del ocho de diciembre del dos mil trece automáticamente la condición de no hallada** hasta el uno de enero del dos mil catorce, y posteriormente, al no declarar o confirmar su domicilio fiscal dentro del plazo establecido, **la condición de no habida a partir del dos de enero del dos mil catorce**, [...] [Énfasis agregado]*

g) Por último, tomando en cuenta la **información publicada por la SUNAT en el registro RUC**, respecto a la empresa demandante, y en consideración al argumento de dicha parte referido a la acreditación de que el único trabajador era su representante, el colegiado superior refiere que dicha **información resulta irrelevante para la resolución de la materia controvertida**, en tanto la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y de las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445 se realizaron en el domicilio fiscal declarado por la demandante.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

A partir del contexto narrado, esta Sala Suprema advierte que la información publicada en la página web de la SUNAT (Consultas RUC¹⁴), referente a los “Representantes Legales de 20489439264 - DISTRIBUIDORA HAROLD EIRL”, se condice con el contenido de la Partida Electrónica Nº 11019734 emitida por la SUNARP; puesto que, como se ha reiterado, con la información de dicha partida la recurrente pretende resaltar que su único trabajador era su titular gerente — que, en la fecha que se realizaron las notificaciones de las resoluciones coactivas, se encontraba privado de su libertad—. Por tal motivo, se colige que al emitirse la sentencia de vista se valoró la situación legal del representante de la empresa demandante; en consecuencia, se ratifica que en el caso concreto no se vulneró el derecho de defensa de esta parte ni sus derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

En esa misma línea, habiéndose corroborado que la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y de las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445 se realizaron conforme a ley, al dirigirse al domicilio fiscal declarado por la demandante; es pertinente mencionar que, según el Informe Nº 141-2017-SUNAT/7N930 (fojas veinticinco a treinta y cuatro del tomo V del expediente administrativo electrónico), el trece de diciembre de dos mil trece se publicó en la página web de la SUNAT la lista de los contribuyentes que adquirieron la condición de “no hallado”, incluyendo a la empresa demandante (Distribuidora Harold EIRL), en la que se le requirió que cumpla con levantar tal condición declarando su nuevo domicilio fiscal o confirmando el actual hasta el último día hábil del mes de diciembre de dos mil trece; así como también que, ante el incumplimiento de la empresa, el dos de enero de dos mil catorce se publicó la relación de contribuyentes que adquirieron la condición de “no habido”, que incluía también a la demandante. De este modo, al haberse seguido el procedimiento previsto en el Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, las notificaciones realizadas con posterioridad a la fecha en

¹⁴ <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe>

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

que la demandante adquirió la condición de “no habida”, fueron conforme al artículo 104 del Código Tributario, tal como lo determinaron las instancias de mérito.

6.6. En suma, atendiendo a los fundamentos expresados, se colige que el contenido de la Partida Electrónica Nº 11019734 (adjuntada en primera instancia) y de la carta notarial remitida por la Corporación Lindley Sociedad Anónima (adjuntada en segunda instancia), no se contraponen al razonamiento lógico-jurídico esbozado por el Juzgado y la Sala Superior; máxime si en este último caso —al adjuntarse la acotada carta notarial en el recurso de apelación— la propia demandante indicó que con dicho documento “acreditaba que la Corporación Lindley Sociedad Anónima no renovarían el contrato que ambas celebraron en su oportunidad”, sin explicar la forma en que tal afirmación coadyuvaría al análisis y resolución de la materia controvertida.

6.7. De igual forma, es necesario resaltar que tanto el Juzgado como la Sala Superior valoraron los distintos documentos contenidos en el expediente administrativo a fin de emitir pronunciamiento de fondo; entre ellos, destaca el **certificado de libertad**, del dieciséis de mayo de dos mil catorce (foja ciento quince del tomo V del expediente administrativo electrónico), en el que se **certifica que el señor Carlos Francisco Vásquez Jurado** —titular-gerente de la empresa demandante— **ingresó al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, el día catorce de diciembre de dos mil diez, y egresó el día dieciséis de mayo de dos mil catorce**, debido a que el Tercer Juzgado Penal Nacional varió la detención dictada en su contra por la medida de comparecencia restringida.

Así las cosas, teniendo en cuenta el contenido de dicho documento y que la empresa adquirió la **condición de “no habida” el dos de enero de dos mil catorce**, se colige que desde mayo de dos mil catorce su titular-gerente se

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

encontraba en libertad para apersonarse ante la administración tributaria e indagar sobre el estado del procedimiento administrativo que tenía pendiente y que, en su oportunidad, fue suspendido mediante la Carta Nº 120-2011-SUNAT/2R1000 (foja ciento diecisiete del tomo I del expediente administrativo electrónico), notificada el tres de febrero de dos mil once en el domicilio fiscal de la empresa¹⁵ —suspensión temporal que se sustentó en el impedimento de presentar la documentación solicitada por encontrarse incautada—. En ese sentido, desde mayo de dos mil catorce, el titular gerente de la empresa podía haber verificado que su representada había adquirido la condición de “no habido”, puesto que basta con revisar la página web de la SUNAT (Consultas RUC), para advertir que la empresa continúa con dicha condición y que claramente en el ítem “Condición del Contribuyente” se exhorta lo siguiente: “Deberá declarar el nuevo domicilio fiscal o confirmar el señalado en el RUC. Para ello, deberá acercarse a los Centros de Servicios al Contribuyente con los documentos que sustenten el nuevo domicilio”.

Aunado a ello, cuando mediante la Carta Nº 2243-2016-SUNAT/6N0920, notificada el **dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis**, mediante la página web de la SUNAT, se dispone el reinicio de la fiscalización, el titular-gerente de la empresa ya se encontraba en libertad para tomar conocimiento de ello. Lo mismo sucede con la notificación de los requerimientos y resultados de requerimientos emitidos con posterioridad a dicha carta, esto es, emitidos también en el año dos mil dieciséis, puesto que en tal fecha el titular-gerente de la empresa demandante ya se encontraba en libertad.

6.8. De este modo, resulta contradictorio que —a pesar de que el representante de la empresa se encontraba en libertad desde el dieciséis de mayo de dos mil catorce— no se haya apersonado ante la SUNAT cuando el procedimiento

¹⁵ Se precisa que el domicilio fiscal de la empresa es el siguiente: Jr. Aguilar Nº 907, Huánuco, Huánuco, Huánuco. Asimismo, conforme a Consultas RUC de la página web de la SUNAT, se tiene que dicho domicilio no ha variado hasta la actualidad; véase: <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe>

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

seguía en fiscalización, sino que lo haya hecho cuando el procedimiento ya se encontraba en etapa contencioso-tributaria. Ello no se condice con lo previsto en el numeral 1.8 del artículo IV¹⁶ del título preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, norma común que dirige los procedimientos especiales; dado que, como se ha mencionado, el titular-gerente de la empresa demandante recién se apersonó ante la administración tributaria luego de la notificación de los valores¹⁷, es decir, para interponer contra estos su recurso de reclamación; y, posteriormente, ante la notificación de la Resolución de Oficina Zonal Nº 1960140002939/SUNAT, que declaró infundada la reclamación, proceder con la interposición de su recurso de apelación, que finalmente dio lugar a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10739-2-2018.

6.9. En consideración a los argumentos expuestos, no se puede soslayar que el ofrecimiento del medio probatorio consistente en la Partida Electrónica Nº 11019734 fue declarado improcedente. De otro lado, tampoco se puede proceder a la valoración de dicho documento, toda vez que ello no se condice con la naturaleza y fines del recurso de casación, máxime si tanto en primera como en segunda instancia se ha emitido pronunciamiento de fondo luego del análisis de la normativa pertinente, la verificación de la subsunción de la base fáctica en el supuesto jurídico, y la valoración conjunta del acervo probatorio obrante en el expediente administrativo electrónico.

¹⁶ **Ley Nº 27444**

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

[...]

*1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, **los administrados**, sus representantes o abogados y, en general, **todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por** el respeto mutuo, la **colaboración** y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley.*

[...]

¹⁷ Resoluciones de Determinación Nº 194-003-0003908 y Nº 194-003-0003923 y la Resolución de Multa Nº 194-002-0013411

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

Siguiendo la línea de razonamiento, cabe precisar que la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia ha establecido que no compete a los tribunales de casación efectuar valoración de hechos o medios probatorios; por ejemplo:

Casación Nº 137-2000 Lima, publicada en el diario *El Peruano* el veintitrés de marzo del año dos mil

Atribuir un sentido determinado a un hecho conforme al mérito probatorio que se extraiga de una determinada prueba constituye una facultad del juzgador prevista en la ley procesal, por lo que la conclusión fáctica a que arriba el juzgador sobre los hechos no pueda ser reexaminada en sede casatoria por no ser actividad constitutiva del recurso de casación.

Casación Nº 2059-2012 La Libertad, publicada en el diario oficial *El Peruano* el dos de febrero de dos mil trece

Este Supremo tribunal no está facultado a debatir aspecto de hechos pues lo contrario significaría revisar la situación fáctica establecida por las instancias de mérito lo cual implica la revaloración de las pruebas resultando dicha actividad ajena la finalidad prevista por el artículo 384 del Código Procesal Civil esto es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, así como la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.

Casación Nº 1892-077 Lambayeque, publicada en el diario oficial *El Peruano* el treinta de junio de dos mil ocho

[...] resulta contrario a la naturaleza y fines del recurso extraordinario de casación cuestionar los hechos que fueron establecidos en las instancias de mérito, pues el recurso de casación no constituye una tercera instancia en la que se deba efectuar una nueva revisión de lo establecido en las instancias de origen [...]

6.10. Por último, atendiendo que —para sustentar la infracción normativa de carácter procesal— la recurrente también hizo alusión a un defecto en la motivación de la sentencia de vista, mencionándolo de forma meramente enunciativa y omitiendo explicar dicho defecto de motivación; se reitera que la Sala Superior emitió un pronunciamiento congruente, luego de la valoración probatoria del expediente administrativo electrónico, y debidamente motivado, en el cual resolvió la materia controvertida previamente delimitada en su considerando quinto. Por lo demás, este Tribunal Supremo no está facultado para subsanar la deficiencia argumentativa del recurso de casación, no solo por la naturaleza extraordinaria y formal *per se* del recurso, sino porque ello implicaría contravenir el principio de imparcialidad que todo órgano jurisdiccional debe procurar en salvaguarda de los derechos de las partes procesales, criterio acogido en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece:

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

*[...] El recurso extraordinario de casación es eminentemente formal y excepcional por cuanto se estructura con precisa y estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil constituyendo responsabilidad de los justiciables —recurrentes— saber adecuar los agravios que invocan a las causales que para dicha finalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma procesal toda vez que **el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso ni integrar o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal** no pudiendo subsanarse de oficio los defectos incurridos por los recurrentes en la formulación del recurso. [...]*¹⁸
[Énfasis agregados]

6.11. En suma, las alegaciones de la casacionista respecto a este extremo no tienen asidero alguno, motivo por el cual, remitiéndonos a los fundamentos esbozados, corresponde **declarar infundada la infracción normativa de carácter procesal**. En consecuencia, se procederá con el análisis de las causales casatorias de naturaleza material.

SÉPTIMO. Análisis de las causales de casación de naturaleza material

7.1. La recurrente denuncia la infracción del artículo 102 del Código Penal, del artículo 171 del Código de Procedimientos Penales y del artículo 316 del Nuevo Código Procesal Penal. De los argumentos expuestos por dicha parte, se desprende que la tipología de tales infracciones consiste en la “inaplicación” de las normas acotadas, puesto que, al referirse a la incautación de bienes en el proceso penal —que, supuestamente, constituirían instrumentos y efectos del delito presuntamente cometido por Carlos Francisco Vásquez Jurado, representante de Distribuidora Harold EIRL—, con la aplicación de las normas denunciadas la Sala Superior habría determinado que aún está pendiente la devolución de los documentos contables incautados, que en su oportunidad fueron solicitados por la SUNAT. Asimismo, en consideración a la vinculación de la regulación de tales normas y en aplicación del artículo V del título preliminar del Código Procesal Civil, que regula, entre otros, el principio de concentración, se procederá al análisis conjunto de las infracciones normativas mencionadas.

¹⁸ Casación N.º 3842-2014 Lima, publicada en el diario oficial *El Peruano* el uno de agosto de dos mil dieciséis.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

7.2. Al respecto, en primer término, es pertinente citar las normas antes anotadas, teniendo en cuenta el principio de la temporalidad de las leyes.

Código Penal - Decreto Legislativo Nº 635

Artículo 102.- Decomiso o pérdida de efectos provenientes del delito

El Juez resolverá el decomiso o pérdida de los objetos de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado así como los efectos, sean éstos bienes, dinero, ganancias o cualquier producto proveniente de dicha infracción, salvo que exista un proceso autónomo para ello.

El Juez podrá disponer en todos los casos, con carácter previo, la medida de incautación, debiendo además proceder conforme a lo previsto en otras normas especiales.

Nuevo Código Procesal Penal - Decreto Legislativo Nº 957

Artículo 316 Objeto de la incautación.-

1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la Investigación Preparatoria, ya sea por la Policía o por el Ministerio Público.

2. Acto seguido, el Fiscal requerirá inmediatamente al Juez de la Investigación Preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se emitirá, sin trámite alguno, en el plazo de dos días.

3. En todo caso, para dictar la medida se tendrá en cuenta las previsiones y limitaciones establecidas en los artículos 102 y 103 del Código Penal.

Código de Procedimientos Penales - Ley Nº 9024

Artículo 171.- Los instrumentos, armas y efectos que se recojan se sellarán, si fuere posible, acordando su retención y conservación. Las diligencias a que ésto diere lugar se firmarán por la persona en cuyo poder se hubiesen hallado, y en su defecto por dos testigos.

Si los objetos no pudieren por su naturaleza conservarse en su forma primitiva, el juez resolverá lo que estime más conveniente para conservarlos del mejor modo posible.

7.3. Ahora bien, considerando que la casacionista formuló tres infracciones normativas por la “inaplicación” de distintas normas materiales, se debe tener presente que:

*La inaplicación de una norma jurídica supone constatar que el hecho probado se subsume en una norma que lo regula; el soslayar tal constatación constituye un supuesto de inaplicación de esta, de modo que **para fundar esta causal la argumentación del recurso debe estar orientada a destacar la desidia, desconocimiento o dolo del juzgador respecto a la aplicación de la norma invocada** y que, a juicio de la impugnante de un caso concreto analizado, debió ser aplicada; exigiéndose, además, a la recurrente que **demuestre que el supuesto hipotético de la citada norma es aplicable a una cuestión fáctica** establecido en autos y cómo su aplicación modificatoria el resultado del juzgamiento.¹⁹ [Énfasis nuestro]*

El análisis de estas causales implica que la empresa demandante haya invocado las normas denunciadas en su recurso de apelación; sin embargo, ello no ha

¹⁹ Casación N.º 287-2003 Huánuco, publicada en el diario oficial *El Peruano* el treinta de diciembre de dos mil tres.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

ocurrido en el caso de autos. Por tanto, como “[...] las cuestiones no apeladas no pueden ser materia de casación; es decir, no se puede plantear como agravio (en casación) aquello que no se reclamó en apelación [...]”²⁰, se colige que este extremo no tiene asidero alguno.

7.4. Sin perjuicio de lo indicado, se advierte que las normas denunciadas no tienen relevancia para la resolución de la materia controvertida, puesto que sugieren un análisis propio de un proceso penal y no de un proceso contencioso administrativo con subespecialidad tributaria. Esto es, tales normas no guardan relación con este caso concreto.

7.5. Aunado a ello, en aplicación del principio de congruencia procesal, es relevante mencionar que en la demanda no se invocó el artículo 102 del Código Penal, el artículo 171 del Código de Procedimientos Penales ni el artículo 316 del Nuevo Código Procesal Penal; e incluso, tal como se ha indicado en el numeral 7.3. de la presente ejecutoria suprema, las normas denunciadas tampoco fueron invocadas en el recurso de apelación. Por tanto, este Supremo Tribunal no puede extralimitarse de sus atribuciones y pronunciarse sobre un extremo no debatido en instancia judicial.

7.6. Adicionalmente, no escapa de nuestro análisis que las infracciones normativas de carácter material fueron sustentadas principalmente con la cita textual de cada una de las normas denunciadas, pero se omitió explicar de forma suficiente la incidencia que podría tener la aplicación de estas en la decisión judicial emitida por la Sala Superior.

7.7. Sobre el análisis de fondo del caso concreto, se reitera que tanto en la página web de la SUNAT (Consultas RUC) como en la Partida Electrónica

²⁰ Casación N.º 4994-2007 Lima, publicada en el diario oficial *El Peruano* el uno de diciembre de dos mil ocho.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

Nº 11019734 emitida por la SUNARP, consta que la demandante Distribuidora Harold EIRL tenía y tiene (hasta la actualidad) un único gerente y representante; sin embargo, ello no repercute en la validez de las notificaciones de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 19100600007480 y de las Resoluciones Coactivas Nº 1910070010207 y Nº 1910070011445, en tanto estas fueron remitidas al domicilio fiscal declarado por la propia empresa; máxime si, conforme a lo previsto en el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario, las notificaciones realizadas en el domicilio fiscal se consideran válidas siempre que el deudor no haya comunicado el cambio de dicho domicilio. Así las cosas, al haberse obtenido como resultado de tales notificaciones —y en tres oportunidades distintas— la “negativa de recepción por persona capaz”, correspondía aplicar los artículos 4 y 6 del Decreto Supremo Nº 041-2006-EF, que regulan, por un lado, el procedimiento para adquirir la condición de “no hallado” y, por otro, el procedimiento para adquirir la condición de “no habido”.

7.8. Finalmente, atendiendo a los fundamentos expuestos, se colige que las causales casatorias analizadas deben **desestimarse**. En consecuencia, corresponde declarar **infundado el recurso de casación**.

DECISIÓN

Por tales fundamentos y de acuerdo con lo regulado por el artículo 397 del Código Procesal Civil, en su texto aplicable, **SE RESUELVE:**

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante **Distribuidora Harold Empresa Individual de Responsabilidad Limitada** el once de enero de dos mil veintidós (foja doscientos noventa y seis).

SEGUNDO: NO CASAR la sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete, del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno (foja doscientos

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 1068-2022
LIMA

setenta y ocho), expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número once, del treinta de abril de dos mil veintiuno (foja doscientos diecisiete), que declaró infundada la demanda.

TERCERO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el diario oficial *El Peruano* conforme a ley, en los seguidos por Distribuidora Harold Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo **Burneo Bermejo**.

SS.

BURNEO BERMEJO

BUSTAMANTE ZEGARRA

CABELLO MATAMALA

DELGADO AYBAR

TOVAR BUENDÍA

LLLH/rpg